

EDITORIAL

La continuación y profundización de la guerra civil que se libra actualmente en El Salvador, y la aparente falta de capacidad de la Fuerza Armada para responder adecuadamente y así contrarrestar y lograr una victoria en el corto plazo sobre el movimiento insurgente, no sólo parecen haber provocado una alteración del precario equilibrio dinámico militar en el cual se habían mantenido las fuerzas en conflicto, sino también parecen haber desvanecido las esperanzas que depositaron diversos sectores nacionales y el gobierno de Washington en las elecciones de marzo de 1982, y en la conformación del gobierno de "Unidad Nacional" como factores que propiciarían la reactivación económica del país en 1983.

En este contexto, la misma prolongación del conflicto ha causado que la economía salvadoreña se vaya transformando, tendencial y cualitativamente, de una economía en guerra, es decir, afectada en forma directa por la confrontación armada, a una economía de guerra, en la cual la política económica del régimen salvadoreño y una parte sustancial de los recursos económicos y financieros nacionales, se intentan poner en función y se instrumentalizan en favor de la estrategia que busca la victoria política y militar de los sectores, fuerzas y grupos que apoyan y están directa e indirectamente en el poder, sobre las fuerzas insurgentes y de oposición aglutinadas en el FDR-FMLN.

La necesidad por parte de los gobiernos de El Salvador y de los EE.UU de concebir una estrategia unificada e integral, que ponga todas las fuerzas y áreas de la vida social en función de este proyecto, ha empezado a ser explicitada públicamente por distintas instancias oficiales, especialmente por el estamento militar salvadoreño, quien por medio del Ministro de Defensa y del Jefe de la Policía Nacional han expresado que el soporte cívico para la acción militar debe ser el de usar todos los recursos en una economía activa, donde "la retaguardia social y económica" deben aportar a la "acción militar".

No es sorprendente pues, que la tarea fundamental para la concreción de estos objetivos sea la reasignación de recursos reales y financieros por parte del gobierno salvadoreño hacia la satisfacción de las crecientes necesidades militares. En el amplio sentido de la palabra, éstas parecen incluir no sólo los recursos directamente necesarios para el combate armado, sino también aquellos que sirvan para sostener y consolidar las alianzas políticas y cohesiones institucionales requeridas para la formación de una base social de apoyo al esfuerzo bélico.

Así, la política económica oficial ha ido, en un primer momento, tratando de lograr incrementos en la producción; luego, persiguiendo disminuir y restringir la demanda por parte de la población civil; y por último, buscando eliminar las fricciones con el gran capital en tanto que éste sector debería constituir la base principal de sustentación del proyecto político y del esfuerzo de guerra.

Sin embargo, después de dos años y medio de aplicación de estas medidas, y a juzgar por los datos existentes y el análisis de la realidad política nacional, los resultados en estas tres áreas no parecen corresponder a las expectativas puestas, y su misma aplicación también ha generado una serie de contradicciones y fricciones no previstas que han puesto en precariedad el proyecto en sí.

Es más, todo parece indicar que la concepción de una economía de guerra que surge en el último año, no ve en la reactivación económica, una pieza vital dentro de la estrategia contrainsurgente. Por un lado, lo que ha venido interesando, no parece ser la producción o la oferta en general de todo o cualquier tipo de productos, sino la oferta agregada "militarizable", generada primordialmente a través de importaciones. De igual manera, a nivel de la producción nacional, el incremento de la producción exportable se ha vuelto importante en la medida que pueda alimentar la creciente necesidad de divisas que requiere el aparato militar. El resto de la producción nacional, aquella destinada a satisfacer las necesidades y otros tipos de consumo de la población civil, parece interesar siempre y cuando no genere conflicto con el objetivo primordial de incrementar la porción de la oferta disponible para la guerra.

Por el otro lado, los esfuerzos por limar diferencias y recuperar el apoyo de la empresa privada, severamente dañada por los intentos de reformas realizadas por la Democracia Cristiana y algunos miembros de la Fuerza Armada, no parecen haberse centrado en la incentivación de la producción, sino más bien en la adopción de una política liberal y tolerante por parte del gobierno en la asignación de créditos y divisas.

En realidad todo parece indicar que la reactivación económica sólo tendría razón de ser si se tratara de buscar el apoyo de los sectores populares al proyecto contrainsurgente. Pero, si en tiempos de paz, la estructura de la sociedad salvadoreña ha sido incapaz de brindar bienestar para la mayoría de la población, mucho menos puede esperarse que se consiga la lealtad política de estos sectores en tiempos de guerra, sobre todo, debido al deterioro profundo sufrido en sus niveles de vida en estos últimos dos años y medio de guerra civil y a la falta de una mejoría previsible en el futuro cercano.

Es por eso que en este contexto, no deben de olvidarse que las realidades históricas que han configurado al país: la condición de sub-desarrollo y dependencia; la racionalidad conservadora de los grupos conductores de los proyectos políticos dominantes; el carácter mismo de la guerra que se libra en contra de una parte sustancial del propio pueblo salvadoreño; la prolongación del conflicto y los altos niveles de destrucción que están acercando aceleradamente a El Salvador a una situación límite de deterioro económico, político y social; y los crecientes niveles de involucramiento por parte de los EE.UU, son todos elementos que poco contribuyen a que el proyecto de una economía de guerra tenga posibilidades de éxito en el país. Es en este sentido, que se hace imperioso recuperar la racionalidad, y la nacionalidad para que las soluciones que se busquen, no sean militares sino políticas y que tomen en cuenta a todas las fuerzas en pugna y las verdaderas y sentidas necesidades populares.

San Salvador, Julio de 1983